

a) Es un criterio que inspira la interpretación y aplicación de las normas.  
 b) Es un concepto que necesita ser interpretado.  
 c) Constituye un elemento nuclear de la decisión administrativa. Así resulta que cuando el error de la Administración sobre la oportunidad de la medida se manifiesta evidentemente, la declaración de que se ha cometido dicho error, entra dentro del control mínimo de la legalidad en su relación con la conformidad del acto con el derecho, en una relación de conformidad pero no de simple compatibilidad, lo que significa la aplicación de la teoría del control mínimo aplicado a la materia del interés general, descubriendo la existencia de la desviación de poder, del error de derecho y del error manifiesto en la apreciación, para depurar todas las interpretaciones equivocadas llevadas a cabo por la Administración en la realización del interés general, lo que la Sala de instancia no aprecia y este criterio se confirma en sede casacional, por los siguientes razonamientos:

1.º) Las previsiones de fundamentación y actuación de la Corporación Local a los fines previstos en el sistema jurídico, de forma que todos los actos de intervención fueron congruentes con los motivos y fines que justifican la competencia atribuida a la Corporación Local para intervenir en la actividad de los administrados y cuyos principios rectores se contienen en el RSCL de 17 Jun. 1955, en especial en las previsiones contenidas en los arts. 4 y 6.

2.º) Existe objetivamente un análisis de las técnicas de control de la actuación administrativa sobre los hechos determinantes, que admitidas en nuestro sistema jurídico por reiterada jurisprudencia, llegan a la consideración final de reconocer circunstancias habilitadoras del quehacer de la Administración municipal, pues estamos ante un acto que objetiva y formalmente está ajustado a la legalidad.

3.º) Finalmente, la regla pacta sunt servanda ha venido a ser mitigada por la jurisprudencia con la aplicación de ciertos arbitrios de equidad a las convenciones bilaterales de ejecución sucesiva de plazo y con la incorporación a nuestro ordenamiento positivo de la adecuación del contrato a las nuevas circunstancias sobrevenidas a lo largo de su ejecución, cuando se altera la base del negocio o contrato que ha de cumplir el fin previamente establecido, estando facultada la Corporación local en caso de incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones contraídas para exigir el cumplimiento o declarar la resolución contractual, según las disposiciones relativas a la contratación local, llegándose a la conclusión final de la sumisión a la norma de los poderes públicos, con la interdicción de la arbitrariedad en su actuación, la primacía de la ley y del conjunto normativo como postulado básico del Estado de Derecho y la sujeción de los actos de la Administración pública al control de los Tribunales, todo ello en aplicación de los arts. 9.3, 103.1 y 106.1 CE, invocados por la parte recurrente en casación, que no resultan infringidos.

Atendido pues que resulta justificado por motivos de interés público, y vistas las circunstancias observadas en los pliegos el proceder al desistimiento del procedimiento de adjudicación por inconcreción de los pliegos.

Siendo que el art. 139 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que en el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también, en el supuesto de su publicación, en el Diario Oficial que corresponda. El apartado segundo del referido precepto establece el límite máximo para que el órgano de contratación pueda acordar la renuncia o desistimiento en su caso, estableciendo que podrá acordarse en cualquier fase, pero con anterioridad a la adjudicación provisional.

Según se establece en el apartado cuarto del art. 139, el desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El último inciso prevé que el desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

Visto que los errores advertidos en los Pliegos de Condiciones Administrativas pueden vulnerar el principio de objetividad, al poder incurrir en errores de valoración por indeterminación de los criterios de valoración establecidos en la cláusula Novena del Pliego de condiciones Técnicas.

Se considera que está justificada la concurrencia de la causa de infracción no subsanable en las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación.

Por lo expuesto, a tenor de lo previsto en la legislación vigente,

#### DECRETO

PRIMERO.- Desistir del procedimiento de adjudicación iniciado para la adjudicación del contrato de servicio de asesoramiento urbanístico de la Comarca de La Ribagorza a tenor de lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de Contratos del Sector Público por concurrir causa justificativa suficiente por apreciarse una infracción no subsanable que requiere la modificación de las cláusulas de los pliegos administrativos y técnicos, en la cláusula octava de los Pliegos de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio resumen así como indeterminación e inexactitud en la cláusula novena, apartado 4º,

SEGUNDO.- Anunciar el desistimiento en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos oportunos.

TERCERO.- Contra este acuerdo y a tenor de lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede inter-

poner alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Graus, a 2 de marzo de 2009.- El presidente, Jose Franch Aventín.

## ENTIDADES LOCALES

### ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRELISA

1418

#### ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DE LAS CUENTAS GENERALES PARA LOS EJERCICIOS 2004 Y 2005

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesta al público la Cuenta General de los ejercicios 2004 y 2005 por el plazo de quince días.

Si en este plazo y ocho días más, los interesados hubieran presentado alegaciones, reclamaciones y/o sugerencias, la Comisión procederá emitir un nuevo informe.

En Torrelisa, a 26 de enero de 2009.- El alcalde pedáneo, Francisco Puyuelo Puértolas.

### ENTIDAD LOCAL MENOR DE ASO DE SOBREMONTA

1423

#### ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamaciones al expediente de modificación de crédito 1/2008, el mismo se considera definitivamente aprobado, siendo su resumen el siguiente:

#### SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Capítulo 6 Inversiones Reales ..... 11.250,00 euros.

#### CRÉDITO EXTRAORDINARIO

Capítulo 6 Inversiones Reales ..... 58.200,00 euros.

#### FINANCIACIÓN

Capítulo 7 Transferencias de capital ..... 12.900,00 euros.

Capítulo 8 Activos Financieros ..... 56.550,00 euros.

Aso de Sobremonta, a 25 de febrero de 2009.- El alcalde pedáneo, José Antonio Escartín Casasús.

## MANCOMUNIDADES

### MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE ANTILLÓN Y SEIS PUEBLOS MÁS

1439

#### ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2009

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 11 de diciembre 2008 ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE ANTILLÓN Y SEIS PUEBLOS MÁS para el ejercicio 2009, cuyo Estado de Gastos Consolidado asciende a 30.005 euros y el Estado de Ingresos a 30.005 euros, junto con sus Bases de Ejecución, la Plantilla de Personal y sus anexos y documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este Presupuesto General.

En Bleuca, a 20 febrero de 2009.- El presidente, José María Zamora Baruerer.

## DOCUMENTOS EXPUESTOS

**1436 Ayuntamiento de Sahún.-** Aprobación inicial del Presupuesto del Ejercicio 2009. Plazo 15 días hábiles.

**1419 Entidad Local Menor de Torrelisa (El Pueyo de Araguás).-** Aprobación inicial de los presupuestos de la entidad, para los ejercicios 2006 y 2007. Plazo 15 días.

**1438 Mancomunidad de Aguas de Antillón y seis pueblos más.-** Exposición al público de la liquidación presupuesto 2008. Plazo quince días y ocho más.